

dos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada*.—*Pedro Ogazon*.—*J. M. Lafraqua*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. Auza*.—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias.—México, Junio 14 de 1872.—*Agustín Peralta*.

AMPARO promovido ante el juez de Distrito de Aguascalientes por el C. Casimiro Diaz, contra el Gefe Político del Partido de la Capital, por violacion en su persona del art. 19 de la Constitucion.

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Aguascalientes, Mayo 17 de 1872.—El que suscribe, en ejercicio de la promotoría fiscal, por ministerio de la ley, evacuando el traslado que se le dió en el presente negocio, espone:

Que visto lo actuado en este expediente, se patentiza que el quejoso, llamado Casimiro Diaz, fué reducido á prision el dia 21 de Abril, de orden de la Gefatura política de esta Ciudad, y por excitativa de la de S. Luis Potosí.

El motivo de tal prision, es el pedido de esta última Gefatura, quien expone que tiene malos informes del relacionado Casimiro Diaz.

El que suscribe no cree bastante ese motivo para reducir, ni menos para retener en prision indefinida á ningun ciudadano.

Ha corrido bastante tiempo para determinar legalmente la prision del citado Diaz, y no hay razon legal que autorice la prolongacion de esa prision.

Por lo espuesto, el que suscribe cree, que efectivamente se han violado en la persona del quejoso las garantías otorgadas en el art. 19 de la Constitucion general de la República, y que por lo mismo debe ser amparado por la Justicia de la Union.

Sin embargo, ese Juzgado determina-

rá lo que crea de justicia.—(Firmado) *A. Conejo*.

#### SENTENCIA del Juzgado de Distrito.

Aguascalientes, 28 de Mayo de 1872.—Visto el presente juicio de amparo que promovió el C. Casimiro Diaz contra el Gefe Político del Partido de esta Capital, C. Diego Ortigosa, manifestando que dicho funcionario lo redujo á prision desde el dia veintiuno del próximo pasado Abril, sin que hasta el dia diez del presente, en que interpuso el recurso de amparo, se le hubiese tomado declaracion alguna ni héchosele saber el motivo de su prision, ni dictado tampoco el auto prevenido por el art. 19 de la Constitucion federal, cuya garantía se ha violado en su persona. Visto el informe rendido por el C. Gefe Político, en el cual espone, sin negar los hechos de que hace mérito el quejoso: que mandó aprehenderlo, porque se hallaba comprendido en una lista de salteadores y plajiaros recomendados por la Gefatura Política de San Luis Potosí, á quien dió aviso de la aprehension pidiéndole informe, el cual espera segun el telégrama que exhibió en calidad de justificante; y que como aún no recibe tal informe, y fundado en que el art. 19 de la ley de 18 de Mayo de 1871 suspende para los salteadores, no solo la garantía otorgada por el art. 19 de la Constitucion á que se acoge el actor, sino tambien las consignadas en los arts. 20 y 21 de aquella, ha creído de su deber no exearcelarlo hasta no recibir los informes que espera, si estos le fueren favorables. Visto el pedimento fiscal que no considera bastantes, para el procedimiento del C. Gefe Político, los malos informes que dice tener contra el citado Casimiro Diaz, apoyando la solicitud de éste; el alegato de buena prueba que presentó el C. Ramon Diaz, hermano del solicitante; las

ratificaciones hechas por este, y todo lo demas que convino ver y tener presente, y

Considerando: que con el informe rendido por el C. Gefe Político, están justificados los hechos en que apoya su querrela el actor, razon por la cual no se consideró necesario abrir este juicio á prueba, y que con estos hechos no solo se ha violado en la persona del quejoso la garantía del art. 19 constitucional á que se acoge, sino tambien las que insinúa el mismo C. Gefe Político en su citado informe, y aún otras que el Juzgado se abstiene de mencionar, por no ser permitido á la justicia, dar á las partes mas derechos que los que solicitan.

Considerando: que aunque el mismo funcionario alega en su favor la suspension de garantías, para haber procedido así y para mantener aún reducido á prision arbitraria al citado Casimiro Diaz, no es admisible por varias razones; 1ª: porque no está probado que el precitado Casimiro Diaz sea plajiaro, ni se hace mérito de algun hecho particular que lo condene, y aunque así fuera, no estaba autorizado ningun funcionario para retenerle en una prision indefinida, con mengua de lo dispuesto por el art. 19 de la Constitucion, habiendo una ley para juzgar á los salteadores y plajiaros; 2ª: por que ademas de no tener justificada esta circunstancia ni presentado siquiera, la lista en que dice estar inscrito el nombre del quejoso, este no es justo motivo para proceder contra ningun ciudadano, necesitándose para ello la identidad de la persona, acusacion de hecho ó hechos particulares, y á lo menos semiplena prueba de ellos; 3ª: porque lejos de que el citado Casimiro Diaz aparezca culpable, por el telegrama del C. Urbano Flores, que presenta como justificante el C. Gefe Político de esta Capital, aparece que todavia hasta el día ocho del presente se procuraban datos contra él del Tribunal de San Luis

Potosí; y 4ª: porque no obstante la suspension de garantías, á que se atiene el C. Gefe Político, ni están suspensas en su totalidad ni para toda clase de personas, ni tampoco están concedidas las facultades extraordinarias á las autoridades políticas, lo cual seria tanto como abrir campo á la arbitrariedad, sino únicamente al Supremo Magistrado de la Nacion que tiene el deber de dar cuenta al Congreso del uso que hiciera de ellas. (arts. 4º y 7º de la ley de 1º de Diciembre de 1871). Por cuyas razones y considerando, el juez que suscribe, con arreglo á los arts. 101 y 102 de la Constitucion federal y 1º, 2º, 13 y 27 de su ley orgánica de 20 de Enero de 1869, falla este juicio con las siguientes proposiciones:

Primera: la Justicia de la Union ampara y protege al C. Casimiro Diaz en la garantía que otorga el art. 19 de la Constitucion federal, violada en su persona por el C. Gefe Político del Partido de esta Capital, C. Diego Ortigosa.

Segunda: siendo el objeto de una sentencia que concede amparo, el de que se restituyan las cosas al estado que guardaban antes de cometerse la violacion de garantías; para que surta su efecto el art. 23 de la ley últimamente citada, transcribese la parte resolutive de esta sentencia á la autoridad ejecutora del acto reclamado.

Tercera: notifiquese esta sentencia, sáquense copias de ella para su publicacion en el Semanario Judicial de la Federacion y periódicos oficiales del Estado y del Gobierno general, remitiéndose el juicio á la Corte Suprema de Justicia. El Lic. Luis G. Solana, juez de Distrito del Estado, definitivamente juzgando, así lo decretó y firmó: doy fé:—*Luis G. Solana.*—*Silverio Arteaga*, secretario.

Es copia que certifico. Aguascalientes, 28 de Mayo de 1872. Doy fé:—*Silverio Arteaga.*

## EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 6 de 1872.

Visto el juicio de amparo promovido en 10 de Mayo último ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, por el C. Casimiro Diaz alegando: que por orden del Gefe Político de esa Capital habia sido reducido á prision desde 21 de Abril próximo anterior, sin que hasta la fecha de su ocurno se le hubiese llamado á declarar, ni dicho el motivo de su prision, ni pronunciado el auto motivado de ella, con lo cual estaba violada en su persona la garantía que otorga el art. 19 de la Constitucion de la República. Visto el informe del Gefe Político de Aguascalientes, autoridad responsable del acto que se reclama, exponiendo: que habia mandado aprehender al quejoso desde la fecha que señala, en virtud de estar comprendido en una lista de salteadores recomendados por la Gefatura Política de San Luis Potosí que habia ofrecido los datos competentes: y que segun la ley de 18 de Mayo de 1871, que suspende varias garantías para aquellos criminales, habia creído de su deber no excarcelar al promovente hasta recibir los datos referidos. Visto el pedimento del Gefe de Hacienda llevando la voz del Ministerio Fiscal y las demas constancias de autos.

Considerando: que el motivo alegado para la prision del quejoso es la acusacion que se le hace de salteador; que no se le ha procesado en virtud de esa acusacion y que en tal concepto dicha prision es indebida: con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869 se resuelve lo siguiente: es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Aguascalientes pronunciada en 28 de Mayo último, por la cual se declara que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Casimiro Diaz en la garantía que otorga el art. 19 de la Constitucion Fe-

deral violada en su persona por el Gefe Político del Partido de esa Capital, C. Diego Ortigosa.

Devuélvanselle sus actuaciones con copia certificada de esa sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*

Es copia.—México, Junio 11 de 1868.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

COMPETENCIA promovida por el Juzgado de primera instancia de Zitácuaro al 27 de lo civil de México, para conocer de la demanda ejecutiva entablada por D. Vicente Heredia contra D. Ignacio Rodriguez

## PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El Fiscal dice: que D. Ignacio Rodriguez y Rodriguez, aceptó en México una libranza por valor de setecientos pesos y de la que es tenedor D. Vicente Heredia. A fin de hacérsela pagar promovió el correspondiente juicio ejecutivo ante el Juzgado 2º de lo civil de esta capital; mas temiendo el actor la ausencia del demandado, solicitó una providencia de arraigo, la que le fué concedida en auto de 4 de Febrero de 1870 y notificada luego á Rodriguez.

A consecuencia sin duda de esa medida, el demandado nombró por su apoderado jurídico al Lic. Benigno Romero con el cual se entendió ya el juicio ejecutivo promovido por Heredia, al estado de que por auto de 18 de Agosto de 1870 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 96 y 98 de nuestra